

Tax and Legal News

Ley 254 del 11 de noviembre de 2021

Mediante la Gaceta Oficial 29413-A del 11 de noviembre de 2021 se publica la Ley 254 de 2021 que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM). A través de dicha Ley se introducen cambios a la Ley 23 del 27 de abril de 2015, la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, la Ley 124 de 7 de enero de 2020, la Ley 129 de 17 de marzo 2020, dos artículos del Código Fiscal y se deroga la Ley 2 de 2011.

Con relación al Código Fiscal, los principales cambios recaen sobre el artículo 318-A donde se adiciona el supuesto que aquellas sociedades que incumplan con cualquier obligación que tenga como sanción la suspensión de los derechos corporativos, se le otorgará 3 meses al vencimiento del plazo para cumplir dicha obligación, ya que posterior al término señalado, se ordenará la liquidación forzosa de la sociedad. Además, se reduce el plazo de reactivación de 2 años a 1 año, la cual deberá realizar cualquier organismo de administración, accionista, socio o cualquier tercero interesado a través del agente residente.

www.pwc.com/interamericas



Previo a la Ley 254, el Registro Público realizaba la disolución de la sociedad de oficio una vez vencido el término de reactivación; sin embargo, con la nueva norma el Registro Público deberá esperar la autorización de la autoridad competente que solicitó la suspensión para proceder a la disolución de la sociedad.

Adicionalmente, se modifica el artículo 756 del Código Fiscal donde se adicionan las sanciones a la sociedad que se encarga de presentar anualmente **el Reporte País por País**, las cuales serán desde B/.100,000.00 hasta B/.500,000.00 en caso de alteración de la documentación que debe ser presentada.

En referencia a las modificaciones realizadas a la Ley 129 de 2020, que regula el **Registro de Beneficiarios Finales**, la nueva norma establece que la jurisdicción donde opera la sociedad es un dato necesario que debe proporcionar el agente residente cuando registre las sociedades que constituya o de las que ya sea agente residente.

Es importante mencionar que el término para **notificar la renuncia como agente residente a la Superintendencia de Sujetos No Financieros** se reduce de 30 días hábiles a 10 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia en el Registro Público. También se reduce el término que tienen los nuevos agentes residentes para notificar el hecho a la Superintendencia de Sujetos No Financieros de 30 días hábiles a 15 días hábiles. Por otro lado, las sanciones aumentan de B/.1,000.00 hasta B/.50,000.00 por persona jurídica para los agentes residentes que no registren o actualicen la información de sus clientes.

De igual manera, la Ley 254 de 2021 introduce cambios a la Ley 124 de 2020 como la integración de nuevas facultades a la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la modificación de la lista de sujetos obligados no financieros. A dicha entidad reguladora se le añaden nuevas facultades: regular y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el la Ley 23 de 2015, regular y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados no financieros en aquellos casos que haya sido designada como autoridad competente y ordenar la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas. En referencia a la lista de sujetos obligados no financieros, se añaden las Notarías al listado y se establecen por separado las actividades que obligan a los abogados y a los contadores a ser sujeto de regulación.

En relación con la **Ley 52 de 2016**, se realizan cambios significativos que impactan las obligaciones de las personas jurídicas y del agente residente.



Por un lado, se añade la obligación de llevar registros contables e información de respaldo de sus transacciones a las personas jurídicas que son meras tenedoras de activos, ya que anteriormente solo se requería para aquellas sociedades que operarán fuera de Panamá.

Asimismo, se obliga a las personas jurídicas a entregar anualmente los registros contables o copia de éstos al agente residente cada 30 de abril, y en los casos en que los registros se mantengan en otro lugar que no sean las oficinas del agente residente, la persona jurídica deberá confirmar al agente residente por escrito los datos de la persona que mantiene los registros contables de la sociedad y la copia de éstos. Es importante que la persona jurídica informe inmediatamente en caso de que la persona que mantiene los registros contables cambie. Por otro lado, también se establece la obligación de proporcionar cualquier información adicional que requiera la autoridad competente en el tiempo establecido por la misma. Con relación a las formalidades de los registros contables destacamos lo siguiente:

1. Las personas jurídicas que no realicen actos de comercio, según el Art 2 del Código de Comercio, deberán entregar información relacionada con el valor de los activos que mantengan, los ingresos que provengan de dichos activos y los pasivos que generen.
2. Las personas jurídicas que realicen actos de comercio fuera de Panamá o cualquier otra que no esté dentro del Art. 2, deberá entregar un diario y un mayor. Se exceptúan las personas jurídicas que se dediquen a la compraventa de títulos de crédito y valores comerciales.

El agente residente debe mantener copia de los certificados de acciones y registro de acciones de aquellas sociedades a las que brinde este servicio. Las personas jurídicas que están exceptuadas de cumplir con las obligaciones detalladas anteriormente son: las que estén listadas en bolsa de valores (nacional o internacional), las que pertenezcan a un organismo internacional, multilateral o a un Estado y los armadores o fletadores de las naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la Marina Mercante de Panamá.

Es necesario destacar que todas aquellas sociedades que hayan sido incorporadas antes del 12 noviembre de 2021 tendrán un plazo de 6 meses para entregar a su agente residente los registros contables o sus copias, además de cualquier otra información en caso de ser solicitada por la autoridad competente. Además, todas aquellas sociedades que se encuentren suspendidas deberán cumplir con la obligación de proporcionar su información financiera o cualquier otro documento adicional requerido y posteriormente seguir con el proceso de reactivación. En caso de que la persona jurídica vaya a hacer un cambio de agente residente, la misma debe proporcionar sus registros contables antes de que se inscriba el cambio en el Registro Público.



En caso de **disolución**, el Agente Residente deberá mantener en sus oficinas los registros contables y documentos de **respaldo de los cinco años previos a la inscripción de la disolución, y por cinco años contados a partir de una inscripción de la disolución** y el Registro Público sólo inscribirá las escrituras donde el agente residente declare que mantiene dicha información.

Con la finalidad de asegurar que los agentes residentes mantengan los registros contables de las sociedades a la cuales brindan servicios, éstos deberán declarar cada **15 de julio ante la DGI** la lista de personas jurídicas cuya información mantienen en sus oficinas. Los agentes residentes deben presentar la primera declaración dentro de los treinta días calendario posteriores a los 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de la ley.

Por último, las sanciones aumentan considerablemente ya que, pueden ir de B/.5,000.00 hasta B/.1,000,000.00, además de que se ordena la suspensión de los derechos corporativos, lo cual puede acarrear la liquidación forzosa de la sociedad, en caso de que no se cumpla con las obligaciones establecidas. Los agentes residentes que incumplan con las disposiciones se les impondrán multas que van desde B/.5,000.00 hasta B/.100,000.00.

En cuanto a las modificaciones introducidas a la **Ley 51 de 2016 (Que establece el Marco Regulatorio de Implementación del Intercambio de Información para Fines Fiscales y otras disposiciones)**, se destacan el cambio a las multas establecidas las cuales comienzan en B/.5,000.00 y pueden ascender hasta B/.100,000.00.

De acuerdo con los cambios establecidos en la **Ley 23 de 2015 (Que adopta medidas para prevenir el (BC/FT/FPADM)**, podemos mencionar un nuevo requerimiento que son las evaluaciones de riesgos a sus clientes sobre estas medidas. Estas evaluaciones de riesgo deben ser documentadas y deben mantenerse actualizadas, pues es imperativo que se mantenga al día perfil transaccional del cliente y monitorear sus movimientos para verificar que cumple con el riesgo establecido.

Por otro lado, las sanciones también experimentan un aumento por parte de los organismos de supervisión por cada actividad donde anteriormente las multas iban de B/.5,000.00 hasta B/.1,000,000.00 y con la actualización aumentan hasta B/.5,000,000.00. Además, en caso de que el agente residente incumpla alguna de las disposiciones establecidas, la Superintendencia de Sujetos No Financieros puede ordenar la suspensión y posteriormente la liquidación forzosa de la sociedad.

La Ley 254 del 11 de noviembre de 2021 empezó a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial.

Tax and Legal News

Law 254 of November 11, 2021

Through Official Gazette 29413-A of November 11, 2021, Law 254 of 2021 is published, which introduces adjustments to the legislation on international tax transparency and prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction.

Through said Law, changes are implemented to Law 23 of April 27, 2015, Law 51 of October 27, 2016, Law 52 of October 27, 2016, Law 124 of January 7, 2020, Law 129 of March 17, 2020, two articles of the Tax Code and Law 2 of 2011 is revoked.

Regarding the Tax Code, the main changes relate to Article 318-A, which adds the premise that those companies that fail to comply with any obligation that has as a sanction the suspension of corporate rights, will be granted 3 months after the expiration of the term to comply with such obligation, because after the term indicated, the forced liquidation of the company will be ordered. In addition, the reactivation term is reduced from 2 years to 1 year, which must be carried out by any management body, shareholder, partner or any interested third party through the resident agent.

www.pwc.com/interamericas



Prior to Law 254, the Public Registry carried out the dissolution of the company ex officio once the reactivation term expired; however, with the new regulation the Public Registry must wait for the authorization of the competent authority that requested the suspension to proceed with the dissolution of the company.

Additionally, Article 756 of the Tax Code is modified, where sanctions are added to the company in charge of filing the **Country by Country Report** annually, which will be from B/.100,000.00 up to B/.500,000.00 in case of alteration of the documentation that must be filed.

In reference to the modifications made to Law 129 of 2020, which regulates the **Registry of Beneficial Owners**, the new regulation establishes that the jurisdiction where the company operates is a necessary piece of information that must be provided by the resident agent when registering the companies that it incorporates or of which it is already a resident agent.

It is important to mention that the **term to notify the resignation as resident agent to the Superintendence of Non-Financial Entities is reduced** from 30 business days to 10 business days following the date of registration of the resignation in the Public Registry. The term for new resident agents to notify the Superintendency of Non-Financial Entities is also reduced from 30 business days to 15 business days. On the other hand, penalties are increased from B/.1,000.00 to B/.50,000.00 per legal entity for resident agents that do not register or update their clients' information.

Additionally, Law 254 of 2021 introduces changes to Law 124 of 2020, such as the inclusion of new powers to the Superintendence of Non-Financial Entities and the modification of the list of non-financial regulated entities. New powers added to this regulatory entity are: regulate and supervise compliance with the provisions of Law 23 of 2015, regulate and supervise compliance with the obligations of non-financial regulated entities in those cases in which it has been designated as the competent authority and order the suspension of corporate rights of legal entities. In reference to the list of non-financial obligated subjects, Notaries are added to the list and the activities that obligate lawyers and accountants to be subject to regulation are established separately.

In relation to **Law 52 of 2016**, significant changes are made that impact the obligations of corporations and the resident agent.



On the one hand, the obligation to keep accounting records and supporting information of their transactions is added to corporations that are mere holders of assets, since previously it was only required for those companies that will operate outside Panama.

Also, corporations are required to deliver annually the accounting records or a copy thereof to the resident agent every April 30, and in cases where the records are kept in a place other than the resident agent's offices, the corporation must confirm to the resident agent in writing the details of the person who keeps the corporation's accounting records and the copy thereof.

It is important for that the corporation informs immediately in case the person keeping the accounting records changes. On the other hand, it is established the obligation to provide any additional information required by the competent authority within the time established by that entity. In relation to the formalities of the accounting records we highlight the following:

1. Companies that do not carry out commercial acts, according to Art. 2 of the Commercial Code, must submit information related to the value of the assets they hold, the income derived from such assets and the liabilities they generate.
2. The companies that carry out acts of commerce outside of Panama or any other that does not fall under Art. 2, must submit a journal and a ledger. Exceptions are made for companies engaged in the purchase and sale of negotiable instruments and commercial securities.

The resident agent must keep a copy of the share certificates and share register of those companies to which it provides this service. The Corporations that are exempted from complying with the obligations detailed above are: those that are listed in a stock exchange (national or international), those that belong to an international or multilateral organization or to a State, and the owners or charterers of vessels registered exclusively under the international service of the Panama Merchant Marine.

It is necessary to highlight that all those companies that have been incorporated before November 12, 2021 will have a term of 6 months to deliver to their resident agent the accounting records or their copies, in addition to any other information in case it is requested by the competent authority. In addition, all those companies that are suspended will have to comply with the obligation to provide their financial information or any other additional documents required and then continue with the reactivation process. In case the legal entity is going to make a change of resident agent, it must provide its accounting records before the change is registered in the Public Registry.



In case of **dissolution**, the Resident Agent must keep the accounting records and supporting documents in its offices of the five years prior to the registration of the dissolution, and for five years counted as of a registration of the dissolution and the Public Registry will only register the deeds where the resident agent declares that it keeps such information.

To ensure that resident agents maintain the accounting records of the companies to which they provide services, they must declare every July 15 **before the DGI** the list of companies whose information they maintain in their offices. Resident agents must file the first declaration within thirty calendar days after 6 months from the effective date of the law.

Finally, the penalties increase considerably since they can range from B/.5,000.00 up to B/.1,000,000.00, in addition to the suspension of corporate rights, which can result in the forced liquidation of the company in case the established obligations are not complied with. Resident agents who fail to comply with the provisions will be fined from B/.5,000.00 up to B/.100,000.00.

Regarding the modifications introduced **to Law 51 of 2016 (Which establishes the Regulatory Framework for the Implementation of the Exchange of Information for Tax Purposes and other provisions)**, the change to the established fines which start at B/.5,000.00 and may amount up to B/.100,000.00 stand out.

According to the changes established in **Law 23 of 2015 (Which adopts measures to prevent prevention of money laundering, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction)**, we can mention a new requirement which is requirement to perform risk assessments. These risk assessments must be documented and must be kept updated, as it is imperative to update the client's transactional profile and monitor their movements to verify that they comply with the established risk.

On the other hand, the sanctions also experience an increase, previously the fines ranged from B/.5,000.00 up to B/.1,000,000.00 and with the update they increase up to B/.5,000,000.00. In addition, if the resident agent fails to comply with any of the established provisions, the Superintendence of Non-Financial Entities may order the suspension and later the forced liquidation of the company.

Law 254 of November 11, 2021 became effective as of its promulgation in the Official Gazette.



Contáctenos

Nuestro equipo

Marisol Arcia

Territory Senior Partner
PwC Interaméricas

marisol.arcia@pwc.com

Francisco Barrios González

Socio Líder Regional de
Impuestos, Legal y BPO
PwC Interaméricas

francisco.barrios@pwc.com

Yaremis Pérez

Socia de Impuestos y Legal
PwC Panamá

yaremis.perez@pwc.com

Ricardo A. Madrid

Director de BPO
PwC Panamá

ricardo.madrid@pwc.com

Marseda Rakipaj

Socio de Precios de Transferencia
PwC Panamá

marseda.rakipaj@pwc.com

Otros canales

pwc.com/interamericas

- Facebook: <https://es-la.facebook.com/PwCInteramericas/>
- Twitter: https://twitter.com/PwC_Interameric
- LinkedIn: <https://pa.linkedin.com/company/pwc-interamericas>
- Instagram: <https://www.instagram.com/pwcinteramericas/?hl=es>
- YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC4byblcAsC4gUIRKoFKgsMQ>



El contenido de este boletín es solo para fines de información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores profesionales.

© 2021 PricewaterhouseCoopers, S.R.L. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles.